

CAPÍTULO IV

IBEROAMÉRICA: UN AÑO CONVULSO

IBEROAMÉRICA: UN AÑO CONVULSO

Por Carlos Malamud Rikles

INTRODUCCIÓN

El año 2006 ha sido muy importante para América Latina, comenzando por el intenso calendario electoral, que se ha desarrollado con una gran normalidad, lo que permite hablar de la consolidación de los procesos democráticos. Al mismo tiempo, la sucesión de elecciones hizo posible que el «frente populista», liderado por la Venezuela de Hugo Chávez y que cuenta con el respaldo entusiasta de la Cuba castrista, consolidara algunas posiciones a partir de los triunfos de Evo Morales, en Bolivia, en diciembre de 2005, y las posteriores victorias de Rafael Correa, en Ecuador, y Daniel Ortega, en Nicaragua, ambos en la última parte de 2006. En este sentido, Correa se ha sumado rápidamente al coro bolivariano de quienes proclaman la necesidad de construir el «socialismo del siglo XXI», aunque de momento ni Correa, ni Hugo Chávez, ni ningún otro panegirista de esta propuesta, ha querido definir el concepto o darle un cierto contenido doctrinario coherente y homogéneo. Desde la perspectiva política, a estas circunstancias hay que sumar el anuncio del serio deterioro físico de la salud de Fidel Castro, que forzó su alejamiento «temporal» del poder en Cuba.

Simultáneamente, si contemplamos la perspectiva económica, la realidad latinoamericana ha estado marcada por la persistencia de altas tasas de crecimiento, vinculadas de forma clara al tirón de la demanda de materias primas de algunos países asiáticos, comenzando por la China y la India. A la vista de semejantes cuestiones y su indudable impacto en la marcha de la coyuntura regional, el presente capítulo se estructurará en torno a las siguientes líneas: 1) un análisis de los procesos electorales de 2006,

complementado con 2) un panorama general de la situación política del continente, bajo la óptica del llamado «giro a la izquierda», 3) las perspectivas que se abren en Venezuela tras el nuevo triunfo de Hugo Chávez y sus anuncios de profundización revolucionaria, comenzando por los efectos de la nueva ley «habilitante» que le ha otorgado plenos poderes legislativos al comandante Chávez, 4) la coyuntura en Cuba y las perspectivas de sucesión o transición que se abren a partir del alejamiento «temporal» de Fidel Castro del poder, 5) el estado de los procesos de integración regional después de un año de fuertes tensiones bilaterales y subregionales, partiendo del fuerte impacto provocado por la salida de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y 6) la evolución de la coyuntura económica, con especial atención al sector energético. Igualmente, este trabajo abordará algunas cuestiones relacionadas con el estado de los intereses españoles en la región, tanto en lo que supone los intereses políticos y culturales, como los económicos, con especial referencia a las inversiones españolas en los principales países de América Latina.

LOS PROCESOS ELECTORALES

Como ya se ha dicho, 2006 fue un año de intensa actividad electoral en buena parte de América Latina y mucho más si añadimos las dos elecciones celebradas en diciembre de 2005 (en Bolivia y Chile). A estos dos comicios hay que añadir las elecciones presidenciales de 2006 en Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Haití, México, Nicaragua, Perú y Venezuela. De este modo se votó en once países: dos del Cono Sur (Brasil y Chile), los cinco de la región andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), dos de América Central (Costa Rica y Nicaragua), más México y Haití. Como bien señala Daniel Zovatto en su informe electoral para el Latinobarómetro 2006 (1), nunca antes se había votado tanto y de forma tan simultánea en América Latina. El precedente más cercano puede ser el de 1989, cuando hubo elecciones presidenciales en nueve países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Uruguay. En 1994, se realizaron ocho elecciones de esta naturaleza: Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Panamá, República Dominicana y Uruguay. Sin embargo, en ninguno de los dos casos anteriores las expectativas eran tan grandes como las existentes en 2006. En líneas generales, la amplia sucesión de elecciones cele-

(1) Ver «Balance electoral 2005 – 2006», en «Informe Latinobarómetro 2006», en http://www.latinobarometro.org/uploads/media/2006_01.pdf.

bradas a lo largo y a lo ancho de toda América Latina en las tres últimas décadas nos habla claramente de la normalización electoral producida en la región y si bien las elecciones por si mismas no permiten calificar la naturaleza y la índole de las democracias latinoamericanas, son un factor que no debe perderse de vista bajo ningún concepto.

El conjunto de todos los procesos electorales desarrollados en el último año, ha permitido trazar un nuevo mapa político de América Latina, que está cruzado por las contradicciones y los matices, las luces y las sombras, todo lo cual impide extraer fáciles y rápidas conclusiones acerca de lo que allí sucede. Sin embargo, a la luz de los resultados obtenidos se pueden componer algunas notas generales, como las anotadas a continuación, que intentaremos permitan establecer una serie de pautas para comprender mejor lo que sucede en el conjunto de América Latina, más allá de las grandes dificultades existentes para generalizar al respecto.

La primera nota a resaltar es la normalidad de la mayor parte de las elecciones realizadas entre diciembre de 2005 y fines de 2006, pese al carácter muy competido de algunas de ellas y al cerrado escrutinio en algunos casos concretos. Si bien Costa Rica y México tuvieron los escrutinios más dramáticos, por el escaso margen que separaba a los dos candidatos en disputa, éstos fueron resueltos de manera muy distinta en uno y otro caso. Mientras en Costa Rica los vencidos terminaron acatando de forma absoluta el resultado de la elección y la legalidad institucional vigente, en México, la nota dominante, a la vez que negativa, fue el llamado a la rebeldía realizado por Andrés Manuel López Obrador desde el mismo momento en que en la noche electoral se hizo pública la noticia de su derrota. En realidad, ésta fue la noticia más desestabilizadora de todas aquellas vinculadas al intenso calendario electoral de 2006.

También hay que mencionar la consolidación de los procesos electorales en la región, con lo que eso supone para el mantenimiento de los distintos procesos democráticos de América Latina. Desde esta perspectiva, un indicador interesante es el de la participación popular en los comicios. Como no podía ser de otra manera, las cifras de participación aumentaron en algunos países y disminuyeron en otros. En cuatro casos (Colombia, Costa Rica, México –un 5%– y Nicaragua) la afluencia a las urnas disminuyó en relación a las elecciones anteriores. Al mismo tiempo, se produjeron aumentos de participación en otros cuatro países (Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela –un 18,8%–). De este modo, se puede observar un leve aumento en los niveles de participación regional, que pasaron de un 69,94%, en el período 1978-2004, a un 70,18 en los años 1978-2006.

En los últimos años, se ha reforzado la tendencia favorable al claro predominio de la segunda vuelta en las elecciones presidenciales en América Latina. En estos momentos, dicho mecanismo está implantado en 13 de los 18 países latinoamericanos (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Uruguay). Sin embargo, en 2006 sólo en tres de las ocho elecciones disputadas bajo el sistema de doble vuelta (Brasil, Ecuador y Perú) hubo que recurrir al *ballotage*, al no alcanzarse las mayorías fijadas por las diferentes leyes electorales. Sin embargo, en este punto, como en tantos otros referidos a los sistemas políticos latinoamericanos, la casuística es muy grande y no en todos los casos es necesario conseguir más del 50% de los votos válidamente emitidos para evitar la segunda vuelta, como muestran los casos de Nicaragua y Costa Rica. También hay que recordar que en Ecuador y Perú, quienes finalmente se terminaron imponiendo (Rafael Correa y Alán García) fueron los que quedaron segundos en la primera vuelta. El sistema a doble vuelta tiende a reforzar los componentes presidencialistas de los sistemas políticos latinoamericanos, ya que otorga a los presidentes triunfantes en la segunda vuelta un plus de legitimidad del que inicialmente carecen y debilitan la posición de parlamentos controlados por la oposición. Quizá el caso del Ecuador sea uno de los más claros. Pese a que Rafael Correa no ganó en la primera vuelta, donde sólo obtuvo algo menos del 23% de los votos, el nuevo presidente se cree con la legitimidad y el respaldo popular suficientes como para impulsar un profundo proceso de refundación nacional, comenzando por la reforma constitucional, con miras a impulsar la construcción del socialismo del siglo XXI. Lo lamentable de éste, y otros casos similares, es el olvido de las enseñanzas de la experiencia chilena después de la victoria electoral de Salvador Allende, en la década de 1970.

Otra de las tendencias que se están confirmando es la deriva a favor de la reelección del candidato presidente que se presentaba a los comicios, como ocurrió con Lula da Silva en Brasil, Hugo Chávez en Venezuela y Álvaro Uribe en Colombia, aunque en este caso fue necesario modificar la Constitución vigente. Esto último también confirma otra de las recientes modas políticas latinoamericanas, la de la modificación de las Constituciones en vigor para permitir la reelección del presidente en ejercicio del poder, lo que en algunos casos se complementa con la tendencia a apostar por procesos constituyentes de carácter refundacional (los procesos de Bolivia y Ecuador apuntan en ambos sentidos y ya se está hablando en Nicaragua de la opción reeleccionista). Esta tendencia se ve complementada con el triunfo de algunos ex presidentes, allí donde fue

posible, como ocurrió con Oscar Arias en Costa Rica, Alán García en Perú y Daniel Ortega en Nicaragua. Esta situación ha limitado los efectos de la alternancia, que sólo se materializó en algunos países (Ecuador con Alfredo Correa, Nicaragua con Daniel Ortega o Perú con Alán García), aunque con características muy disímiles en todos estos casos.

LA SITUACIÓN POLÍTICA Y EL GIRO A LA IZQUIERDA EN AMÉRICA LATINA

Pese a la insistencia de ciertos análisis al respecto, no se puede concluir de forma concluyente en que el balance general del proceso político regional sea la consolidación de un supuesto giro a la izquierda iniciado algunos años atrás. En primer lugar, la sintonía entre todos los países teóricamente englobados en la etiqueta de contar con gobiernos izquierdistas dista mucho de ser total, como se ve en la relación bilateral entre Argentina y Uruguay, ambos países teóricamente gobernados por la izquierda, pero que mantienen un serio diferendo por la construcción en terrenos uruguayos de dos fábricas de pasta de celulosa. Prueba de la crispación existente es el bloqueo, en la parte argentina, de los puentes que comunican a los dos países por vía terrestre, así como el insólito gesto del gobierno del presidente Kirchner de acudir ante el Tribunal Internacional de La Haya para resolver un conflicto que el propio Mercosur ha sido incapaz de hacerlo.

Segundo, la existencia de distintas sensibilidades entre las izquierdas gobernantes, más allá del hecho importante que en algunos casos éstas gobiernan en coalición con otros partidos de centro o de centro derecha (Chile y su Concertación entre socialistas y demócrata cristianos es el ejemplo más claro, aunque no el único), a lo que se suma, en bastantes países, la ausencia de mayorías parlamentarias suficientes para respaldar al oficialismo gobernante. Por último, la creciente insatisfacción del gobierno brasileño con algunas de las últimas medidas radicales del gobierno venezolano, como la deriva nacionalizadora del régimen en algunos sectores económicos, como las comunicaciones, la energía o, inclusive, los medios de comunicación. Por eso, no son casuales algunas filtraciones a la prensa de ciertos dichos del presidente Lula en respaldo de las libertades individuales y de la democracia.

De las elecciones celebradas entre fines de 2005 y 2006 podemos englobar dentro del concepto izquierda a: Bolivia (Evo Morales), Brasil (Luiz

Inácio Lula da Silva), Chile (Michelle Bachelet), Costa Rica (Oscar Arias), Ecuador (Alfredo Correa), Nicaragua (Daniel Ortega), Perú (Alán García) y Venezuela (Hugo Chávez). Por el contrario, en Colombia (Álvaro Uribe) y México (Felipe Calderón), los presidentes electos pueden ser englobados dentro de la derecha o del centro derecha. Estos gobiernos, más algunos de los ya existentes en la región (como el argentino, el uruguayo o el panameño) suelen incluirse en el concepto izquierda. Con todos ellos se puede intentar alguna clasificación al respecto. En realidad, se puede identificar un primer grupo de países caracterizados claramente por sus políticas populistas, o neopopulistas según algunas definiciones más recientes, encabezados por Venezuela; un grupo en el que también se integran Bolivia y Ecuador. Con Nicaragua, pese a algunas declaraciones y actos del actual presidente, Daniel Ortega, como la vinculación de su país a la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA), todavía es pronto para ver la definitiva orientación del nuevo gobierno sandinista, que podría inclinarse más a favor de la integración centroamericana, aunque la mayor parte de sus actitudes, su desprecio por las instituciones y la concentración de poder en sus manos y las de su esposa, Rosario Murillo, hacen presumir un mayor alineamiento con Chávez y una clara deriva populista. Todos estos países cuentan con el entusiasta apoyo de Cuba, que ve en ellos la gran posibilidad de romper el ostracismo a que se vio confinado durante muchos años. Ahora bien, el principal motivo del apoyo de Fidel Castro al proyecto bolivariano de Hugo Chávez es la entrega de casi 100.000 barriles de petróleo diarios, a precios subvencionados y a cambio de la presencia de médicos e instructores deportivos cubanos. Sin embargo, en algunos círculos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias cubanas, caracterizadas por su fuerte nacionalismo, la creciente influencia venezolana no es recibida con buenos ojos, si bien no hay manifestaciones públicas y rotundas en este sentido.

Por otro lado, tenemos a un grupo de países, encabezados por el Brasil de Lula, el Chile de la Concertación y el Uruguay de Tabaré Vázquez, con presidentes que se pueden definir como social demócratas, o de una izquierda modernizadora y partidaria del mercado, aunque en el caso de Brasil y Chile las alianzas de gobierno sean bastante amplias. No casualmente, estos tres países cuentan con los sistemas de partidos y los sistemas políticos más estables e institucionalizados de toda la región. Junto a ellos se alinean otros países, entre los que se cuentan Panamá y Perú. Quedan algunos casos de más difícil clasificación, entre los cuales destacan la Argentina de Néstor Kirchner y el gobierno colorado de Nicanor Duarte Frutos en Paraguay. El caso más polémico es el

de Kirchner, a quienes muchos analistas definen como un político de izquierdas, si bien lo que más claramente ha definido su acción de gobierno ha sido un fuerte nacionalismo económico y una creciente intervención del Estado en la actividad económica, como refleja, aunque no sólo, la lucha contra la inflación y la creciente dependencia financiera de Venezuela. Por eso, si algún adjetivo le cabe a Kirchner y a su gobierno es el de peronista.

Ahora bien, más allá de las disquisiciones hechas entre gobiernos populistas o neo populistas, por un lado, y social demócratas o socialistas modernizantes, por el otro, al final de cuentas lo que termina siendo relevante es el grado de alineación con el proyecto bolivariano de Hugo Chávez. En este sentido, se puede decir que desde las elecciones bolivianas, con el triunfo de Evo Morales, hasta los comicios de Ecuador y Nicaragua, el inicial eje Caracas-La Habana ha sumado tres aliados más. Descontado el caso de Morales, con un sometimiento importante a las directrices venezolanas, queda por ver el rumbo que seguirán Ecuador y Nicaragua. Sin embargo, a la vista de lo ocurrido en el acto de toma de posesión de Daniel Ortega en Managua y de la gira del primer ministro iraní Mahmud Ahmadineyad a Ecuador y Nicaragua, una gira posiblemente organizada por la diplomacia venezolana, resulta bastante predecible la orientación de los dos nuevos gobiernos latinoamericanos.

Una cuestión importante es si el gobierno de Chávez podrá seguir destinando un volumen importante de recursos para sostener económicamente a sus más incondicionales aliados. Tras los 100.000 barriles diarios de petróleo que llegan a Cuba y las ayudas a Bolivia, la duda es cuánto queda para Ecuador y Nicaragua. En este sentido, el acuerdo entre Venezuela e Irán, que crea un fondo de 2.000 millones de dólares para cooperación en terceros países de África y América Latina parece aclarar un poco el panorama, aunque de momento encontramos un buen número de promesas y pocos actos concretos de la mano de la diplomacia venezolana. Fuera de este núcleo bolivariano, que tiene un primer círculo en el TCP (Tratado de Comercio de los Pueblos), firmado por Bolivia, Cuba y Venezuela; encontramos al ALBA, que ha recibido las recientes adhesiones de Nicaragua y Ecuador.

Por eso, es importante ver qué es lo que harán los otros gobiernos englobados dentro de la izquierda regional y que tienen una conducta menos confrontacional con Estados Unidos, comenzando por Brasil, pero siguiendo por Chile, Uruguay, Perú, Costa Rica, Panamá y, en menor medi-

da, Argentina, que últimamente se ha caracterizado por un discurso ambiguo que ha intentado navegar entre dos aguas, entre mantener abiertos ciertos compromisos con Estados Unidos y su entusiasmo y dependencia financiera por la Venezuela bolivariana. A la vista de lo ocurrido en 2006, habrá que seguir muy de cerca el estado de las relaciones bilaterales entre Brasil y Venezuela, ya que más allá de las buenas palabras de respaldo mutuo entre los dos países, se desarrolla una lucha sorda por el liderazgo regional, que sin duda irá en aumento a partir del ingreso de Venezuela en el Mercosur. Desde esta perspectiva, la idea desarrollada hace dos años atrás de que los procesos de integración regional avanzarían de forma decidida a partir de la convergencia política e ideológica de buena parte de los gobiernos de la región, especialmente en América del Sur, se ha demostrado claramente impropcedente.

Por último, no debe olvidarse el componente étnico en la lucha política regional. En este sentido, el gobierno boliviano de Evo Morales hace gala de su indigenismo, e inclusive convoca en su defensa a las milicias paramilitares de los «ponchos rojos» de Omasuyos. Por eso, resultará interesante ver cómo se cierra la propuesta de estado plurinacional y multiétnico elevada por el partido gobernante en Bolivia, el MAS (Movimiento al Socialismo), a la Asamblea Constituyente, aunque las señales que envía el gobierno boliviano no son nada tranquilizadoras. En Ecuador también encontramos una creciente movilización indigenista, aunque los resultados de la elección presidencial de 2006 fueron bastante mediocres para las opciones que defendían estos puntos de vista. Mientras en Perú y México, los movimientos indigenistas son más débiles y tienen más claros los límites del sistema político nacional, en Bolivia y Ecuador encontramos una deriva que podría terminar en planteamientos totalmente contrarios a las libertades democráticas y con serias amenazas a los valores de la ciudadanía política. Un claro precedente en esta línea es la iniciativa del gobierno boliviano de equiparar a la justicia nacional con la comunitaria, algo preocupante si se tiene en cuenta que los jueces no están sometidos a ningún tipo de control institucional, que no hay leyes escritas, que la presunción de inocencia no existe, que la figura de la apelación es inexistente y que, inclusive, están contemplados los castigos corporales. En Guatemala, la presentación de Rigoberto Menchú como candidata para las próximas elecciones presidenciales abre un gran interrogante consistente en ver cómo votarán los sectores populares del país, inclusive los indígenas. No debe olvidarse que algunos grupos indígenas y ciertos dirigentes del mismo origen se manifestaron rotundamente contrarios a su candidatura.

VENEZUELA: LA PROFUNDIZACIÓN DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA

Desde el mismo momento en que se tuvo conocimiento de la magnitud del triunfo electoral del oficialismo en Venezuela, la situación ha alcanzado unos picos de tensión desconocidos en los últimos meses. De acuerdo con el reelecto Hugo Chávez, su nuevo período de gobierno va a estar marcado por la profundización del proceso revolucionario teóricamente iniciado con su llegada al poder y que debería desembocar en la creación del Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV) y en la construcción del socialismo del siglo XXI. A partir del capital político acumulado en los últimos años, expresado de forma contundente en el 63% de los votos obtenidos en la elección presidencial de diciembre de 2006, Chávez se plantea seguir avanzando en el proceso revolucionario bolivariano iniciado tras su llegada al poder en 1998. Pese a las grandes indefiniciones teóricas y de contenido en todo lo referente al programa de la revolución, y a la necesidad de clarificar ciertas cuestiones pendientes, el programa esbozado por el presidente venezolano no deja de ser preocupante y hace pensar en una importante deriva autoritaria, materializada en la ley «habilitante» que le otorga amplios poderes legislativos durante 18 meses.

Entre las principales medidas anunciadas para el futuro inmediato, destacaban las de permitir la reelección indefinida (lo que requerirá la correspondiente reforma constitucional); la construcción del partido único bolivariano, el citado PSUV, que de momento sólo afectará a los partidarios del oficialismo, aunque nunca se sabe si en este aspecto se querrá seguir finalmente el modelo cubano que no deja lugar para la expresión de la oposición; y la nacionalización de una serie de sectores estratégicos, como el de la energía (incluyendo gas y electricidad) y las telecomunicaciones, procesos que comenzaron con la adquisición de las empresas de electricidad y telefonía: la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV), privatizada en 1991, y la Compañía de Electricidad de Caracas. Así pagó a Verizon Communications por su paquete accionario del 28,51% de CANTV algo más de 570 millones de dólares y 739,26 millones de dólares por el 82,14% de la compañía de Electricidad de Caracas. También están previstas otras iniciativas, como la de acabar con la autonomía del Banco Central, llamar al orden (nacionalizar) a las empresas petroleras internacionales que en la franja del Orinoco esperan explotar crudos ultra pesados o iniciar una reforma educativa que les permita a los niños y a los jóvenes venezolanos diferenciar claramente las ventajas

del socialismo de raíz bolivariana frente a las deformaciones del imperia-
lismo neoliberal. Más recientemente, tras el anuncio de que la inflación ha-
bía subido en enero un 2% y otro 1,4% en febrero, lo que presupone un
panorama bastante sombrío para el resto del año si la tendencia alcista se
mantiene (en los últimos 12 meses el aumento fue del 20,4%), presentó
una gran ofensiva estatal en el control de los precios, que supone la na-
cionalización de empresas productoras y comercializadoras de alimentos,
así como la amenaza de prisión para quienes acaparen productos de pri-
mera necesidad.

Con el fin de poder llevar delante de una forma contundente tal cúmulo
de objetivos, el presidente Chávez ha recordado a sus seguidores la ne-
cesidad de tener las manos libres, de modo de poder gobernar sin inter-
ferencias de ningún tipo. Esto requiere, una vez más, como ya ha habido
ocurrido en 1999, una ley «habilitante» que le confiera plenos poderes. En
este punto resulta bastante sintomático que un presidente que controla
totalmente a su Parlamento, donde prácticamente no hay ni rastros de la
oposición debido al harakiri cometido en su momento, necesite de pode-
res casi dictatoriales para poder gobernar. Así se demuestra, o bien un
desprecio casi absoluto por lo que el Parlamento significa, en línea con su
frontal rechazo de la democracia representativa, o bien un desenfrenado
deseo del ejercicio del poder, o bien ambas cosas a la vez. Sin embargo,
no debe olvidarse que el proyecto debería completarse con una nueva re-
forma constitucional, la segunda bajo el influjo de Chávez, que termine de
diagramar lo que se entiende por poder popular.

Hasta ahora el avance del proyecto chavista se ha hecho sin mayores
costos, más allá de la huelga petrolera y del fallido episodio del efímero go-
bierno de Pedro Carmona en 2002. Habrá que ver, en la situación que se
abre, si el respaldo se mantiene incólume. Por otro lado, hay dos límites que
habrá que ver cómo funcionan y evolucionan en el futuro inmediato. Por un
lado el económico, y la emergencia de algunos nubarrones, como la infla-
ción y el tipo de cambio. Por el otro, la gestión del gobierno y la disponibi-
lidad del capital humano necesario como para profundizar el proyecto revo-
lucionario. Recuérdese que en 2006 los precios aumentaron un 17%, y,
como ya se señaló un 2% en enero último, aunque los alimentos crecieron
un 4%. Lo más preocupante es que comienza a haber serios problemas de
abastecimiento en algunos productos de primera necesidad. En lo referen-
te al tipo de cambio, si bien existe un tipo de cambio fijo, establecido en
2.150 bolívares por dólar desde febrero de 2005, en el mercado paralelo la
cotización de la divisa norteamericana se disparó recientemente por encima

de los 5.000 bolívares por dólar. De momento la situación económica sigue ofreciendo lecturas positivas. En 2006 el PIB creció un 10,3% y las reservas del Banco Central han superado los 35.000 millones de dólares. Las actividades que tuvieron los mayores aumentos en el valor agregado bruto no petrolero fueron las instituciones financieras y de seguros (37%); construcción (29,5%); comunicaciones (23,5%); comercio y servicios de reparación (18,6%); y servicios comunitarios, sociales y personales (14,8%).

La «revolución bolivariana» se presenta como una necesaria confluencia entre el pueblo y sus fuerzas armadas. A esto se suma el desarrollo de la doctrina de la guerra asimétrica como respuesta a una potencial invasión de Estados Unidos, un tema permanentemente aireado por las autoridades venezolanas. El corolario de ambas cuestiones pasa por un claro proceso de rearme de la Fuerza Armada Nacional (FAN), con una cifra de gasto en adquisición de armamentos, en 2005, superior a los 2.200 millones de dólares.

Ante los crecientes problemas por adquirir armamento en sus fuentes tradicionales de aprovisionamiento, comenzando por los EEUU, el comandante Chávez decidió mirar a Rusia, China y otros proveedores alternativos. Los acuerdos de armamento con Rusia se impulsaron tras el viaje del presidente venezolano a Moscú en noviembre de 2004, que tuvo sus frutos en marzo de 2005 con la compra de 100.000 fusiles de asalto Kalashnikov AK 103 y AK 104 para reemplazan los FAL belgas que cuentan con más de 50 años de operatividad en la FAN. El acuerdo también incluía 15 helicópteros: seis MI-17 de transporte, ocho MI-35 de ataque y un MI-26 de transporte. En julio de 2006, Moscú y Caracas firmaron un nuevo acuerdo en esta materia, tras una nueva visita de Hugo Chávez a Rusia. El nuevo contrato incluye el suministro de 24 cazas Sukoi-30 MK2, que sustituirán a los F-16 (adquiridos hace más de 20 años por Venezuela), y que costarán casi 1.500 millones de dólares. También incluye 54 nuevos Mi-35 con capacidad de combate, cuyo precio sumaría otros 250 millones de dólares. A estos nuevos materiales hay que añadir la futura producción en Venezuela de fusiles Kalashnikov y sus respectivas municiones, por valor de 200 millones de dólares, con la puesta en marcha de una instalación industrial para su fabricación en la localidad de Maracay. Esta tendencia hacia el rearme se ha visto reforzada con el anuncio de la adquisición de tres submarinos no nucleares de cuarta generación (2).

(2) CARLOS MALAMUD y CARLOTA GARCÍA ENCINA, «¿Rearme o renovación del equipamiento militar en América Latina?», DT 31/2006 del Real Instituto Elcano, <http://www.realinstituto-elcano.org>

La buena noticia en Venezuela fue la reaparición de la oposición, después de su hibernación tras la derrota en el referéndum revocatorio de 2004 y, especialmente, tras su desesperada apuesta por la abstención en las últimas elecciones legislativas. La campaña de Manuel Rosales demostró una seriedad considerable y queda ver si la experiencia puede dar lugar a un importante esfuerzo organizativo. Sin embargo, la oposición debe resolver algunas cuestiones importantes para poder presentarse como una verdadera alternativa de poder. Por un lado, acabar con las tendencias centrífugas en su seno, acallando, o limitando, a las voces más estridentes que apuestan por soluciones dramáticas al actual proceso político venezolano. Y también, definir claramente la cuestión del liderazgo de todas las fuerzas opositoras, ya que Rosales parece no haber satisfecho todas las expectativas depositadas en él.

LA SUCESIÓN EN CUBA

La enfermedad de Fidel Castro planteó un insólito escenario para la transición en Cuba. Hasta entonces, todos los supuestos previstos por los analistas partían de la muerte de Castro y de la forma que podría adquirir la sucesión a partir de ese momento. Sin embargo, y pese a lo mucho que se ha clarificado la situación desde mediados de 2006, nos enfrentamos con una situación delicada que tiende a ralentizar, al menos en la actual coyuntura, los movimientos en pro de una mayor apertura del régimen. De este modo, tenemos a un Fidel Castro que si bien ha salido del primer plano de la escena pública y gubernamental, que ha dejado en el lugar de mando a su hermano Raúl y a otros destacados dirigentes revolucionarios, no por ello ha dejado de seguir incidiendo en la lucha política cotidiana. De este modo, se ha obstaculizado, por el momento y hasta una mayor clarificación de la situación, la emergencia de aquellos sectores que desde dentro del régimen estarían dispuestos a apoyar, en otras condiciones, posturas más aperturistas. Esta situación se manifiesta en el respaldo que están encontrando los sectores más inmovilistas del régimen y que se manifestó en la reaparición de viejos censores y represores en las pantallas de la televisión oficialista (la única existente). Sin embargo, no se debe olvidar que pese a todos sus inconvenientes la actual coyuntura es el punto de partida de una inevitable apertura en Cuba, que podrá demorar más o menos en función de las resistencias que encuentre y de los brotes de violencia incontrolados que puedan estallar.

Hasta ahora, el esquema de gobierno colegiado ideado por Fidel Castro está funcionando con total normalidad y sin que se hayan producido

desbordes populares de ningún tipo. El actual esquema de poder descansa en Raúl Castro, que no en vano era el ministro de la Defensa, y en los tres Comandantes de la Revolución: Ramiro Valdés, Juan Almeida y Guillermo García. Si bien Raúl no es Comandante de la Revolución, sí funciona como el *primus inter pares* respecto a los otros comandantes, pero no es el máximo líder. Bajo este grupo encontramos un segundo nivel con Carlos Lage, Ricardo Alarcón, Felipe Pérez Roque, y otros altos dirigentes, bastante más jóvenes que los anteriores.

En este esquema, todos aquellos directa, o indirectamente implicados en la tarea de gobierno, o integrantes del Partido Comunista de Cuba, o de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), evitan sacar los pies del plato. Esto hace que mientras Castro viva, esté al tanto de los acontecimientos e incida públicamente en ellos vía telefónica (sea a través de Venezuela o directamente), los enfrentamientos entre posibles bandos y posturas se sustancien por debajo de la mesa. Esto no impide que cada una de las distintas facciones enfrentadas, básicamente los aperturistas o chinos y los ortodoxos o talibanes tropicales, intenten ganar posiciones y ampliar sus bases de poder. Según el discurso oficial, éste está claramente concentrado en el Partido Comunista y en las FAR. Sin embargo, según algunos analistas, el verdadero poder está en el Ejército cubano, que es quién, no sólo tiene el monopolio de la violencia, sino también cuenta con importantes recursos económicos, a partir de su control de numerosas empresas, comenzando por el sector turístico. Mientras Castro viva, el régimen seguirá contando con un fuerte respaldo popular, con el cemento que cohesiona al gobierno y a la sociedad detrás de determinados objetivos. Sin embargo, la muerte de Castro acabará con todo esto de un plumazo y será necesario buscar nuevos mecanismos para que las autoridades que controlen el poder sigan siendo reconocidos por el pueblo. Uno de los puntos en discusión, a partir de ese momento, será el del mantenimiento de los logros revolucionarios y el mantenimiento de los logros acumulados por las elites en el ejercicio del poder. Junto al Partido y al Ejército hay otros actores relevantes que deberán ser analizados, como es la Iglesia, la oposición interna, el exilio de Miami y el gobierno de los Estados Unidos.

Frente a la situación creada en Cuba existen algunos interrogantes, algunos de ellos más próximos a los intereses españoles, como es el del papel que puede jugar España en una eventual transición en la isla, algo que resulta bien valorado por los responsables del tema en el Departamento de Estado, en Washington. Es evidente que si bien los intereses

españoles en Cuba no son tan importantes como los presentes en otros países, sí hay que tener en cuenta los fuertes lazos existentes entre las dos naciones, especialmente a partir del hecho relevante de la gran cantidad de cubanos que tienen lazos familiares con España. Por eso, las posibilidades de actuación de nuestra diplomacia no deben ser despreciadas, frente a otros actores iberoamericanos que tenderán a radicalizar la situación, como Venezuela, u otros que han perdido influencia en los últimos años, como México. En su momento, España impulsó el cambio en la posición común europea hacia Cuba, con el objetivo manifiesto de tomar posiciones frente a una eventual transición. Es de esperar que en su momento esta orientación dé sus frutos y que España pueda limitar los excesos y radicalismos en las posturas más extremas, tanto dentro del régimen como en el exilio de Miami. En este sentido, también son de agradecer los esfuerzos de la diplomacia española por reforzar los contactos con los grupos más importantes allí establecidos. Si bien las experiencias de la transición española no pueden ser automáticamente trasladados a Cuba, sí pueden ser un referente que debería ser tenido en cuenta.

La relación entre Cuba y Venezuela debe ser un punto a seguir con detenimiento, dada la importancia económica de la ayuda venezolana, que ha dado una gran bocanada de oxígeno al régimen castrista, pero también por el papel protagónico que quiere asumir Chávez tras la muerte de Fidel Castro, al buscar convertirse en el heredero de la Revolución Cubana. De alguna manera, la intervención telefónica de Fidel Castro en el programa radiofónico de Hugo Chávez, «Aló Presidente», sería una clara señal de a quien decide unirse como heredero en el campo de la «revolución latinoamericana». Sin embargo, en algunos núcleos de las FAR, caracterizadas durante años por su fuerte nacionalismo, el protagonismo de Chávez y su estilo populista no caen nada bien.

LA INTEGRACIÓN REGIONAL

Como se ha señalado más arriba, era un lugar común entre la mayoría de los dirigentes latinoamericanos, que la convergencia política e ideológica actualmente existente, el famoso giro a la izquierda, debía haber impulsado la integración regional. Sin embargo esto no ha sido así y algunos procesos, con la principal excepción, hasta el momento, del centroamericano, están pasando por agudas crisis. La Comunidad Andina de Naciones (CAN), recibió un duro golpe en el primer semestre del año con la sa-

lida de Venezuela. Y si bien finalmente Bolivia permaneció en el bloque y Chile se incorporó como observador, las cosas no han vuelto a la total normalidad. De forma simultánea a su salida de la CAN, Venezuela decidía incorporarse a Mercosur, y pese a que su membresía fue aprobada a toda velocidad, saltándose todos los plazos legales previamente establecidos por sus propios reglamentos, las cosas no van nada bien en el Mercado Común del Sur, que tiene que hacer frente a la rebeldía de los pequeños (Uruguay y Paraguay) contra los grandes (Argentina y Brasil) y, sobre todo, a la dura lucha entre Argentina y Uruguay por el tema de las papeleras. De forma simultánea, y con escasa coordinación entre ambos, Brasil y Venezuela impulsan el lanzamiento de la Comunidad Sudamericana de Naciones, un proyecto ambiguo que se superpone a las ideas de ampliar el Mercosur, con las incorporaciones inmediatas, según los deseos de algunos, de Bolivia y Ecuador.

El proceso de integración en América Latina se enfrenta a una serie de problemas importantes, comenzando por la falta de liderazgo (ni Brasil ni México asumen claramente su papel y Venezuela, el único que está dispuesto a asumir los costes del liderazgo, padece una falta de entidad al respecto bastante preocupante), pero también al exceso de retórica y de nacionalismo. Esto último impide a los países latinoamericanos ceder la menor cuota de soberanía a efectos de poder construir los necesarios órganos supranacionales capaces de estimular avances importantes en los procesos de integración regional y subregional. En este punto vale la pena preguntarse si la política exterior venezolana, teóricamente inspirada en el discurso bolivariano y en la integración regional, es un elemento que estimula la integración o, por el contrario, la dificulta todavía más, al dividir, de forma cada vez más profunda, a los países de la región. En este sentido, hay algunos hechos importantes, como su salida de la CAN o las manifestaciones del comandante Chávez de que si el Mercosur no se reorientaba en la senda de una mayor integración social y política, desde una perspectiva bolivariana, no tendría ningún inconveniente en acabar con el Mercosur.

Tampoco debe olvidarse que en estos momentos, cuando más se habla de la integración regional, han aflorado un gran número de conflictos bilaterales, inspirados en acontecimientos de los más diversos. Y si bien ninguno de estos conflictos derivará en un enfrentamiento armado o en un choque importante entre los países implicados, su existencia evidencia las graves fallas del proceso integracionista y la falta de definición de objetivos claros y de mecanismos adecuados para avanzar en este terreno.

LA ECONOMÍA

Desde una perspectiva macroeconómica la situación es óptima y asistimos a una serie de elementos que han estado ausentes en los últimos 30 años. 2006, con una estimación global de la CEPAL del 5,3% (3), se trata del tercer año de crecimiento consecutivo a unas tasas bastante reseñables y, lo que es tanto o más importante, todos los países están creciendo al mismo tiempo, si bien a tasas diferentes. Por arriba destacan Venezuela (10.3%) y Argentina (8,5%), aunque no se debe olvidar las tasas importantes de Costa Rica, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay, todas superiores al 6%. Un caso especial es el de Cuba, cuyas autoridades hablan de una tasa de crecimiento del 12,5%, una cifra que suscita dudas entre muchos analistas debido a los peculiares métodos de cálculo de las autoridades económicas cubanas. En el otro extremo destaca Brasil, con una tasa inferior al 3%, que es sólo superior a la de Haití, aunque sus posibilidades de futuro son buenas, especialmente después de la formulación del PAC (Plan de aceleración del crecimiento), presentado por el presidente Lula al comienzo de su segundo mandato. Pero esto no es todo. Hay otros datos importantes que merecen ser considerados, como el hecho de que el crecimiento se está produciendo con estabilidad económica y financiera, con un aumento en las reservas de divisas en poder de los Bancos centrales, con una mayor inclusión social debido a algunas de las políticas públicas que se implementan en pro de los más desfavorecidos y con una mayor integración internacional de la mayor parte de las economías regionales. Con todo, lo más importante es que todos estos procesos tienen lugar en un contexto marcado por el predominio de regímenes democráticos.

Pese a este cuadro tan optimista, estimulado básicamente por el crecimiento de la demanda externa, principalmente la asiática, no sería conveniente olvidarse de la gran vulnerabilidad histórica de América Latina frente a las crisis externas, especialmente los tan temidos shocks monetarios. De ahí que sea importante preguntarse qué es lo que están haciendo en la actualidad los diferentes gobiernos de la región para evitar un impacto futuro, provocado por una caída en los precios de las materias primas, o un empeoramiento en la gestión del abultado déficit fiscal de los Estados Unidos o una escalada imparable de los precios del petróleo. En este sentido,

(3) Comunicado de prensa de la CEPAL (Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe), del 14/XII/2006, <http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/prensa/noticias/comunicados/9/27579/P27579.xml&xsl=/prensa/tpl/p6f.xsl&base=/tpl/top-bottom.xml>.

se ve con preocupación que muy pocos países de la región apuestan claramente por políticas anticíclicas. Quizás Chile sea la principal excepción y Venezuela el caso más flagrante de dilapidación del crecimiento actual.

Como se ha señalado más arriba, en buena medida el crecimiento de América Latina se sustenta en su apertura exterior y en sus mayores exportaciones, ligadas al crecimiento económico internacional y a la fuerte expansión de la demanda de China e India, todo lo cual ha empujado claramente al alza a los precios de las materias primas, especialmente los minerales, comenzando por el petróleo, y los alimentos. Esta coyuntura externa tan favorable provocó un aumento del 8,4% en el volumen de las exportaciones y un 21% en su valor, así como el crecimiento de los precios de los principales productos de exportación. Esta realidad tan positiva se vio acompañada de una evolución favorable de los términos reales de intercambio (un 7% en 2006), que permite vender más caras las materias primas (energéticas y no energéticas) pero a la vez comprar más baratos todos aquellos productos que demandan las economías latinoamericanas (bienes de equipo y productos de consumo), gracias al mayor crecimiento económico. Sin embargo, como no podía ser de otra forma, el impacto de la evolución positiva de los términos de intercambio ha sido desigual en las distintas regiones latinoamericanas. Según la CEPAL, entre la década de 1990 y 2005 los términos de intercambio se revalorizaron un 31% en América del Sur, pero sólo un 10,3% si descontamos Venezuela y Chile, grandes productores y exportadores de petróleo y cobre. México, por su parte, aumentó un 22%, mientras América Central bajaba un 11,8%.

En líneas generales el crecimiento ha sido acompañado de una baja inflación, generalmente por debajo de los 2 dígitos. La inflación promedio regional continuó su tendencia descendente y en 2006 probablemente haya sido del 3,9%, según la CEPAL, frente a un 6,1% en 2005, un 7,7% en 2004, 8,5% en 2003 y 12,1% en 2002. Las mayores excepciones de 2006 han sido Venezuela, con un 17% y Argentina, con un 9,8%, casi en el límite del tan temido 10% y que llevó al gobierno de Néstor Kirchner a un intervencionismo excesivo en su lucha contra la inflación. Junto a esta evolución favorable de la inflación, también observamos la incidencia positiva de un déficit público contenido y un descenso de la prima de riesgo de la deuda soberana a sus mínimos históricos, todo lo cual ha empujado a la baja a las cifras de riesgo país.

El aumento de las exportaciones también ha permitido que la relación deuda externa/exportaciones, o incluso deuda externa /PIB, comenzara a

caer de una forma sostenida a lo largo de 2006. Paralelamente, la mayor parte de los países ha aumentado sus reservas en divisas internacionales (tanto en dólares como en euros). A diferencia de otros períodos, los ingresos fiscales han crecido más que el gasto, hay disciplina fiscal, si bien no se han emprendido, por lo general, las reformas tributarias necesarias para un adecuado funcionamiento del Estado, que suele carecer de los recursos necesarios para desarrollar las políticas públicas que mejoren la situación de la población. Pese a las grandes resistencias suscitadas, se puede afirmar que en buena medida, las enseñanzas del llamado Consenso de Washington han dado sus frutos. Es más, si algo ha distinguido hasta ahora a los actuales neopopulismos de los populismos de los años 50 y 60 del siglo pasado ha sido su mayor preocupación por la disciplina fiscal y el orden macroeconómico. Por tanto, como veremos más adelante, habrá que fijarse en la microeconomía para detectar algunos de los problemas actuales de América Latina.

En relación con la deuda, otro dato importante es que también aumenta la proporción de deuda a tasa fija y en moneda nacional, especialmente después de algunas operaciones de reestructuración de la deuda realizada por algunos países de la región. Éste ha sido el caso de Argentina, que al igual que Brasil también ha cancelado la deuda que tenía con el FMI, por entender el presidente Kirchner que de ese modo, la política económica de su gobierno se vería libre de las influencias del Fondo. En su lugar, Kirchner ha elegido endeudarse con Venezuela, que ya ha comprado bonos por un importe cercano a los 4.000 millones de dólares, pese a tener que pagar unos tipos de interés superiores a los que le cobraba el FMI.

La inversión, formación bruta de capital fijo, crece a buen ritmo, especialmente en América del Sur, aunque todavía es claramente insuficiente para las necesidades de la región. Entre otras cuestiones, se puede observar como la Inversión Extranjera Directa (IED) se ha vuelto más selectiva y responde a las diversas coyunturas nacionales: estabilidad política, pero especialmente al clima de negocios y la seguridad jurídica. Por eso, no es de extrañar que los principales receptores de IED en América Latina sean Brasil, México y Chile, mientras que Argentina, Bolivia y Venezuela han visto una importante ralentización en la llegada de inversiones extranjeras. En toda América Latina la tasa de crecimiento de la IED en 2005 fue de sólo el 3%, una cifra muy por debajo de la registrada en 2004. También hay que tener en cuenta que las tasas de crecimiento más elevadas de IED en las regiones en desarrollo se registraron en Asia occidental

(85%) y en África (78%), donde alcanzaron niveles sin precedentes, 34.000 y 31.000 millones de dólares, respectivamente.

Si bien en 2004 la mejora en la llegada de la IED fue generalizada, en 2005 la IED fue mucho más selectiva y varió según la situación de los países y las subregiones. Si las entradas a América del Sur aumentaron un 20% (45.000 millones de dólares), en América Central y el Caribe, con independencia de los paraísos fiscales, se mantuvo el mismo nivel (23.000 millones). En América del Sur los mayores incrementos se registraron en países andinos como Colombia (227%), Venezuela (95%), Ecuador (65%) o Perú (61%), y también en Uruguay (81%). La IED a Argentina creció levemente (9%), se redujo en Brasil y Chile (en un 16 y un 7% respectivamente), aunque siguió siendo importante. En América Central y el Caribe las entradas disminuyeron ligeramente en México (un -3%) y aumentaron en otros países, salvo en Cuba, Nicaragua y Honduras. En toda América Latina fueron Brasil y México los principales receptores de la IED, con el 17 y el 15%, respectivamente, del total.

Otro dato importante en lo relativo al ingreso de divisas en los diferentes países de la región es el de las remesas de emigrantes, que en 2006 superaron los 60.000 millones de dólares, una cifra comparable a la IED recibida en el mismo período. En 2005, las remesas supusieron 53.600 millones, el 2,3% del PIB (el 10,4% del PIB de América Central, el 5,8% del Caribe y el 2,7% de México). Aquí la gran cuestión, la pregunta del millón, es cómo convertir parte de estas remesas en inversiones productivas, aunque en los últimos años, gracias a ella, la pobreza se ha reducido un 3%, pasando del 28 al 25%.

El crecimiento sostenido de los últimos años ha permitido el aumento del PIB per capita y una reducción de la pobreza y la extrema pobreza, aunque el ritmo de las variaciones depende mucho de las distintas realidades nacionales. No se puede decir algo tan concluyente respecto a la desigualdad, que continúa siendo uno de los problemas más acuciantes de toda la región. Brasil, sin embargo ha conocido una mejora sustancial del índice Gini, si tenemos en cuenta los dos períodos de Fernando Henrique Cardoso y el primero de Lula. Sin embargo, hay algunos analistas que apuntan a que la mejora obtenida en Brasil en los últimos cuatro años se debió más a un mayor empobrecimiento de los sectores medios que a una mejora sustancial de los grupos de peores ingresos. De todas maneras, es innegable que el crecimiento ha influido de un modo destacado en el mercado de trabajo y provocado

disminuciones sustantivas del paro. En el caso concreto de Brasil, si el país logra crecer durante algunos años a tasas superiores al 4%, en parte debido al PAC, se podrían lograr mejoras sustanciales en la lucha contra el desempleo.

Pese a crecer a un buen ritmo, comparado con su pasado inmediato, América Latina no está creciendo tanto si lo comparamos con el resto del mundo. Por eso, el gran interrogante es si, con la actual coyuntura y los actuales precios de las materias primas, América Latina podría crecer mucho más de lo que lo está haciendo hasta ahora. De momento lo que se observa es que la región está creciendo menos que el conjunto de los países en vías de desarrollo. En parte esto se debe al menor crecimiento de las dos mayores economías de la región (México y Brasil), pero no sólo. América Latina está creciendo, obviamente, menos que China, India y el resto del Asia suroriental, pero también crece menos que los países emergentes de la Europa Oriental o incluso que África, algo que sucede por primera vez en la historia. Por eso es importante ver por qué América Latina crece menos que sus competidores más directos y qué es lo que haría falta para crecer a tasas más fuertes.

Hasta ahora el énfasis se ha puesto en el plano macroeconómico, donde, como se ha visto, las cifras y las perspectivas son sumamente favorables. Sin embargo, también es necesario analizar con más detalle todo aquello que ocurre en el nivel microeconómico, lo que permitiría discriminar mejor entre aquellas economías que tienen mayores perspectivas de futuro de las que probablemente puedan verse sometidas a algunas tensiones en el medio plazo. En buena medida, como se ha señalado, hay algunas cuestiones importantes como todo aquello que rodea al buen funcionamiento de las instituciones y la seguridad jurídica, al mayor o menor estímulo al libre funcionamiento del mercado y a la inversión extranjera. Todo esto se relaciona con la cuestión del intervencionismo del Estado en la economía nacional. Desde esta perspectiva se puede decir que los países con peor desempeño en este sentido son Venezuela, Argentina y Bolivia, mientras que los mejores son Chile y Brasil. Por lo visto hasta ahora se puede afirmar que Ecuador y Nicaragua terminarán incorporándose al primer grupo.

Otra cuestión importante en este punto es el tema energético, dada la estrecha vinculación que ha tenido con la situación política. En el primer semestre de 2006 el famoso gaseoducto del Sur, que teóricamente iba a vincular a todo el subcontinente, fue uno de los grandes protagonistas de esta historia, junto con el proceso de nacionalización de los hidrocarbu-

ros en Bolivia. Éste último dio lugar a importantes roces, todavía no totalmente resueltos, entre Bolivia y Brasil, dada la delicada situación en que quedaba Petrobras, la empresa brasileña de hidrocarburos. Sin embargo, a la vista de la delicada situación en que quedaría el futuro energético en Bolivia, el gobierno de Evo Morales debió rectificar, aunque no lo hiciera públicamente, y en las negociaciones con las empresas, especialmente en la letra pequeña de los contratos finalmente firmados, las cosas se desarrollaron de otra manera. Sin embargo, no deja de impactar el siguiente dato: mientras las compañías multinacionales presentes en Bolivia piensan invertir en gas y petróleo en los próximos años 200 millones de dólares, en Brasil, incluido el aporte mayoritario de Petrobras, la inversión en sector será de 83.500 millones de dólares. Es evidente que en este punto la confianza de los inversores en el sistema político de uno y otro país, en la estabilidad y en la oportunidad de los negocios, algo tiene que decir, sumado al hecho importante de la clara apuesta del gobierno brasileño por estimular la inversión extranjera. Por eso, también hay que seguir de cerca la inversión en el sector de hidrocarburos en Venezuela, que de no crecer exponencialmente en los próximos años pueden llevar a PdVsa (Petróleos de Venezuela S.A.) a un verdadero cuello de botella.

ESPAÑA Y AMÉRICA LATINA

En todos estos años las empresas españolas se ha consolidado como uno de los principales inversores extranjeros en América Latina. Esta situación, sumada a los tradicionales lazos lingüísticos, culturales e históricos entre España y el conjunto de los países de la región, han convertido a nuestro país en el principal actor extra regional. Pese a sus limitaciones, la construcción de la comunidad iberoamericana ha colaborado en esta dirección. En estos momentos, ante la cercanía del inicio de las celebraciones de los bicentenarios de las independencias latinoamericanas (con la excepción de Cuba), estos lazos deben ser rescatados a fin de potenciar la presencia de España en América Latina.

En lo referente a la IED, España sigue siendo uno de los mayores inversores en la región, alcanzando un stock acumulado superior a los 115.000 millones de euros, aunque en 2005 la participación de la inversión española en el conjunto de los países de la región ha perdido peso relativo. En los últimos años, especialmente después de la crisis argentina de 2001, la IED española se concentró básicamente en tres países, Brasil,

México y Chile, mientras su comportamiento varió en los restantes como consecuencia de la evolución de la coyuntura política y económica. En lo referente a stock acumulado, los países donde hay una mayor presencia de la inversión española son Argentina (32.112 millones de euros), Brasil (25.985 millones), México (14.892 millones), Chile (10.606 millones), Perú (3.141 millones) y Colombia (3.080 millones). En 2005, los principales receptores de la inversión española fueron Argentina (2.103 millones de euros), Brasil (1.094 millones) y México (360 millones). En Argentina, uno de los problemas que retrajo la inversión española fue la negativa del gobierno argentino de actualizar las tarifas de algunos de los servicios públicos privatizados. Por eso, hay que tener presente que el panorama para 2007, año electoral en Argentina, donde se jugará bien la reelección de Néstor Kirchner, o bien la elección de Cristina Fernández de Kirchner, no son excesivamente mejores que las de los años anteriores.

En 2006 se realizó la Cumbre Iberoamericana de Montevideo, que supuso el estreno de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y de su Secretario General, Enrique Iglesias. En líneas generales el balance que se puede hacer de la Cumbre es de un optimismo moderado sobre el futuro del sistema, que arrastra en estos momentos muchos de los problemas que afectan al conjunto de la región y que son magnificados por las disputas entre los distintos países. Desde esta perspectiva, el futuro de la próxima Cumbre, que se celebrará en Santiago de Chile, aparece con algunas amenazas, a la vista de los riesgos que para su funcionamiento puede suponer el mayor radicalismo de la diplomacia venezolana.

Por último, señalar que la diplomacia española tuvo que enfrentar a lo largo de 2006 algunos puntos calientes en relación con América Latina, comenzando por las lecturas hechas en Estados Unidos de las políticas bilaterales con Cuba y Venezuela, que también se convirtieron en puntos de fricción entre el gobierno y la oposición, lo que muestra el fin del consenso nacional en lo relativo a América Latina y la política iberoamericana. La nacionalización boliviana de los hidrocarburos también afectó negativamente las relaciones con el gobierno de Evo Morales, aunque la línea fijadas por el gobierno, en sintonía con la practicada por todos los gobiernos de la democracia, es tener buenas relaciones con todos los gobiernos de la región, con independencia de su color político. Se trata de una cuestión controvertida ante las crecientes amenazas contra la democracia que se viven en algunos países de la región.

CONCLUSIONES

El balance del intenso calendario electoral en 2006 en América Latina no podía ser más favorable. Pese a algunos temores, los distintos comicios se celebraron de forma pacífica y en el tiempo previsto y, salvo el sobresalto mexicano, las complicaciones fueron mínimas. Este hecho refuerza la postura de quienes hablan de la consolidación de la democracia en la región, aunque se ven con creciente preocupación algunas señales que hablan de un creciente deterioro institucional y de la emergencia de algunos gobiernos, como los de Ortega, Correa y Morales, que se suman al proyecto bolivariano de Hugo Chávez, con sus derivas populistas, personalistas, caudillistas y autoritarias incluidas.

Algo similar ocurre en el plano económico. Es indudable que la coyuntura internacional y el gran tirón de la demanda asiática han permitido un período de cuatro años de crecimiento continuado, a altas tasas, reforzado por el buen comportamiento de otras variables macroeconómicas. Sin embargo, comienzan a sonar algunas alarmas que insisten en que no se está creciendo todo lo que se podría y, sobre todo, que no se está aprovechando el momento para construir las salvaguardas necesarias que pongan a los países a cubierto de nuevos choques externos. El uso clientelístico de los recursos y la utilización discrecional del superávit fiscal en algunos países no deja de ser un nuevo llamado de atención acerca del futuro de la región. Una región que, pese al exceso de retórica que vierte cotidianamente al respecto, no ha podido dar pasos sustanciales en sus procesos de integración regional.